

Ley Hinestrosa: el Super-Estatuto Arbitral



JULIO JOSÉ OROZCO
OROZCO & OROZCO ABOGADOS
julio@orozco-abogados.com

ANTECEDENTES



Aunque la Legislatura 2011-2012 quedará por siempre marcada en la historia como el escandaloso y paupérrimo intento de un Gobierno y de un Congreso para reformular la Justicia Colombiana, -sobre todo en sus delicados componentes de acceso y presupuesto-, una iniciativa que es hoy Ley de la República se salva de ser involucreada en dicha "rajada", como bien lo hubiese afirmado en vida el erudito jurista y profesor Fernando Hinestrosa.

El Estado de Derecho Colombiano no sólo se puso a tono con el conglomerado jurídico internacional líder en el ejercicio de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, sino que se ha dado el lujo de incorporar en su legislación la que tal vez es la ley más moderna sobre arbitraje jamás concebida para una nación emergente como la nuestra. Pese a haber sido tramitada paralelamente con la fracasada Reforma Constitucional a la Justicia, aquella que fue hundida atípica y exóticamente en sesiones extraordinarias, -lo que implica que de verdad no sabemos si rige incluso de facto-, la Ley 1563 de 2012 es la materialización de un muy serio intento llevado a cabo por el Ministro Juan Carlos Esguerra Portocarrero y su equipo en dilecta compañía del Comité Colombiano de Arbitraje y bajo el liderazgo y coordinación del fallecido e importantísimo jurista Fernando Hinestrosa, Exrector de la Universidad Externado de Colombia, razón por demás válida para aplaudir la decisión del Presidente Juan Manuel Santos de bautizar este nuevo estatuto como la "Ley Hinestrosa"; uno de tantos homenajes que el egregio profesor se merece.

Durante estas semanas, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá nos ha invitado a árbitros, abogados y empresarios a unas consecutivas tertulias donde los eminentes autores intelectuales del Estatuto exponen los puntos más relevantes de la nueva norma. Así, de la "Ley Hinestrosa" podemos identificar los artículos de avanzada que la hacen un Super-Estatuto Arbitral.

La "Buena fe de las partes", como principio general del derecho que se convierte en elemento orientador del intelecto de los árbitros a la hora de decidir en sus laudos las causas para los que son habilitados, se reporta en cada uno de los artículos de la norma. En ella verificamos que la jurisdicción y competencia de un tribunal de arbitramento puede detonarse e invocarse incluso cuando no se tiene en los contratos objeto del conflicto el pacto arbitral de carácter expreso, pero cuyo acuerdo de voluntades para tal (derogar la justicia ordinaria y trasladarse al escenario arbitral), logra desprenderse sin duda alguna del universo de relaciones documentales, verbales y electrónicas que gobiernan y gobernaron el giro ordinario de negocios entre esas partes. Esto es sin duda una solución clara, decidida y defini-

tiva para la revitalización de los canales de acceso a la justicia; lo que tanto hemos pedido.

Si seguimos observando la norma, nos encontramos con la no menos importante decisión del Legislativo de autorizar el Arbitraje Técnico y en Equidad cuando de conflictos con entidades públicas se trata. Antes, para pactarse un arbitramento con el estado, -lo que era incluso mal visto y de mal recibo por los representantes legales de las instituciones y empresas públicas, y algo muy atacado por los entes de control-, sólo podía dicho pacto o cláusula singularizarse al Arbitramento en Derecho. Hoy, el nuevo Estatuto permite que los árbitros podamos laudar en observancia de la justicia en equidad y en claro acatamiento de lo preceptuado por las agremiaciones de la técnica, ciencia y tecnología, cuyas opiniones, estudios y recomendaciones son vitales para zanjar diferencias que trastornan las relaciones comerciales de diversos actores del mercado en nuestra vigente modernidad; Otro canal éste de acceso a la justicia que obtenemos fresco, gracias al nuevo Estatuto, y que se compadece con el tumulto de avances que vemos a diario en nuestra sociedad.

Pero es tan de avanzada la reciente legislación aquí comenta-

da, que sus eruditos pensadores intuyeron una meridiana necesidad de legislar acerca de la renuncia al recurso de anulación, para darle al laudo el vigor completo que su tránsito a cosa juzgada merece desde hace décadas, pero cuya ejecutoria se veía un tanto disminuida por la posibilidad de llevarlos al trámite desaprobatorio ante la jurisdicción ordinaria mediando la necesidad de prestar una importante caución como requisito para su procedibilidad. Hoy, si al tenor de esta nueva ley las partes en conflicto deciden voluntariamente renunciar a cualquier posible anulación del laudo, se erige la Justicia Arbitral, léase bien, como el verdadero y oportuno mecanismo para la des congestión de la justicia colombiana; que no nos quepa la menor duda. Para terminar este corto análisis, le damos la bienvenida al capítulo que dicta que los arbitramentos sólo pueden durar seis meses; incluyendo suspensiones de cualquier tipo, y a la novedosa competencia que tienen las partes de fijarle previamente los honorarios a los árbitros, lo que objeta de tajo aquella infame e ignorante crítica sobre que el arbitramento es la justicia para los ricos. Bienvenida sea pues la Ley Hinestrosa: El Super-Estatuto Arbitral.

Medidas inocuas contra el hurto de teléfonos celulares

En virtud de dicho decreto se establece también la creación de una base de datos negativa, de la que harán parte los IMEI de los equipos terminales que han sido reportados como hurtados y o extraviados tanto en Colombia como en el exterior, para que procedan a inhabilitarlos en las redes de comunicaciones móviles. Hasta ahí la medida suena lógica y hasta conveniente si es acompañada de un ataque frontal contra las mafias del regrabado de equipos. Sin embargo en este decreto el gobierno aprovecha para incluir dos restricciones que considero inocuas para el fin declarado además de inconstitucionales.

La primera consiste en restringir el comercio de equipos terminales; únicamente los operadores móviles y los autorizados por es-

tos o por el Ministerio Tic podrán comercializarlos. Esta restricción no alcanzará ningún objetivo concreto en la lucha contra el hurto de celulares, pero en cambio si genera nuevos traumatismos en cuanto a la comercialización de equipos terminales, los cuales por el contrario requerirían ser puestos al alcance del usuario de forma libre e incluso promovida por el gobierno, ojalá liberándolos de impuestos, tasas y contribuciones e incluso subsidiarlos.

La segunda medida es aún más inocua y peligrosa, consiste en la creación de una base de datos positiva de equipos terminales, es decir que todo usuario de un equipo legal, también deberá acompañar el registro actual de su equipo con sus datos biográficos so pena de que su equipo sea incluido en

la lista negativa y en consecuencia sea inhabilitado.

Esta medida no logrará contrarrestar en lo más mínimo el hurto de equipos celulares, si tenemos en cuenta que las mafias nacionales e internacionales cuentan con los conocimientos técnicos suficientes para regrabar los IMEI de los equipos robados y evadir la inhabilitación.

Aprovecho este espacio para solicitar a las autoridades de policía un informe acerca de los resultados de sus operaciones encaminadas al desmantelamiento de las mafias que comercializan los equipos celulares robados, y les pregunto ¿cómo puede ser posible que mientras a los ciudadanos nos restringen cada día más nuestros derechos fundamentales y nuestras garantías constitucionales con la excusa de la inse-

guridad, los delincuentes siguen vendiendo sus botines a plena luz del día en lugares por todos conocidos? ¿Cómo es posible que los mismos agentes de la institución sean clientes de estos ilícitos negocios?

Colombia es el único país del mundo donde la lucha contra el hurto de equipos terminales hurtados ha generado tal magnitud de restricciones en contra de los usuarios, de sus garantías fundamentales y en contra la libertad de comercio. Mientras las autoridades no enfocan sus esfuerzos en contra de las mafias de la regrabación, esta medidas serán un rotundo fracaso que de ninguna manera justifica los graves inconvenientes que genera para los usuarios y para un sector donde cada vez se ve más lejano el día en que Colombia Viva Digital.



HUMBERTO SUÁREZ GÓMEZ
PROFESOR DE DERECHO
POLITÉCNICO

ANTECEDENTES



La semana pasada se venció el plazo que tenían los usuarios de telefonía móvil para inscribir sus teléfonos en la base de datos positiva común de los operadores de telefonía móvil.